

**PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD  
ADMINISTRATIVA: 51/2008.**

**SERVIDORA PÚBLICA:**  
\*\*\*\*\*

**México, Distrito Federal a cuatro de marzo de  
dos mil nueve.**

Vistos para emitir resolución definitiva en el  
procedimiento de responsabilidad administrativa  
**51/2008**, y;

**R E S U L T A N D O:**

**PRIMERO. Denuncia.** Mediante oficio  
CSCJN/DGARARP/DRP/1666/2008 de catorce de  
julio de dos mil ocho, el Director de Registro  
Patrimonial hizo del conocimiento de la Directora  
General de de Responsabilidades Administrativas y  
de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de  
Justicia de la Nación la probable infracción en que  
incurrió la servidora pública \*\*\*\*\*, a lo dispuesto  
en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica  
del Poder Judicial de la Federación, por  
incumplimiento de la obligación contenida en los  
artículos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley  
Federal de Responsabilidades Administrativas de los  
Servidores Públicos, en relación con los numerales

50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, al haber presentado extemporáneamente la declaración de modificación patrimonial, como Asesor, rango A, puesto de confianza, adscrita a la Dirección General de Planeación de lo Jurídico.

**SEGUNDO. Inicio de investigación.** En acuerdo de cuatro de agosto de dos mil ocho, se tuvo por recibido el oficio al que se hizo referencia en el considerando que antecede, por lo que oficiosamente se tomó conocimiento de los hechos que fueron informados y a fin de contar con los elementos necesarios para determinar una infracción administrativa y probable responsabilidad atribuible a \*\*\*\*\* en relación con la presentación oportuna de la declaración de modificación patrimonial, se ordenó abrir el cuaderno de investigación, el cual previas anotaciones que se realizaron en el libro de gobierno de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas se registró con el número **P. R. A. 51/2008** y se ordenó girar oficio a la Dirección General de Personal para que remitiera copia certificada del expediente personal de dicha servidora mismo que fue enviado mediante oficio DGP/DRL/324/2008 (foja 52).

**TERCERO. Inicio de procedimiento.** Una vez integradas las constancias del cuaderno de investigación **P. R. A. 51/2008** se determinó que existían elementos suficientes para sostener que \*\*\*\*\* era probable responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8°, fracción XV, en relación con el diverso 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo Plenario 9/2005, por incumplir la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial en tiempo, por lo que se determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la citada servidora pública; se registró con el número **P. R. A 51/2008** y se le concedió el plazo de cinco días hábiles para que rindiera el informe previsto en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el diverso 38 del Acuerdo Plenario 9/2005 y ofreciera las pruebas que tuviera en su defensa.

Dicho acuerdo fue notificado personalmente a la servidora pública el catorce de agosto de dos mil ocho (foja diecisiete).

**CUARTO. Informe.** El veintidós de agosto de dos mil ocho, (foja 25) se tuvo por rendido el informe presentado por \*\*\*\*\* quien ofreció pruebas -en copia simple- e hizo valer sus defensas.

**QUINTO. Cierre de instrucción.** Por acuerdo de dieciséis de septiembre de dos mil ocho (foja 102), al encontrarse debidamente integrado el expediente se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del dictamen respectivo.

**SEXTO. Dictamen de la Contraloría.** El diez de diciembre de dos mil ocho la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

***“PRIMERO. \*\*\*\*\* es responsable de la infracción administrativa materia de este procedimiento, conforme a lo expuesto en el cuarto considerando de este dictamen.***

***“SEGUNDO. Se propone sancionar a \*\*\*\*\* con una amonestación privada de acuerdo con lo señalado en el último considerando del presente dictamen.***

***...( )***

Las consideraciones en que se sustenta dicha propuesta de resolución, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a \*\*\*\*\* consiste en haber omitido presentar oportunamente la declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, dentro del plazo que establece el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como Asesor, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo desempeñen están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial, de conformidad con lo previsto por el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

II. \*\*\*\*\* es responsable administrativamente de la falta atribuida, consistente en haber omitido presentar oportunamente su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General

Plenario 9/2005, los servidores públicos que ocupen una plaza de Asesor tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de los antecedentes que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

1. El dieciocho de septiembre de dos mil siete, el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia expidió nombramiento a \*\*\*\*\* como Asesor, puesto de confianza, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil siete.

2. De la copia certificada en la que consta la declaración de modificación patrimonial relativa al ejercicio fiscal dos mil siete presentada por \*\*\*\*\*, se advierte que la misma es extemporánea, esto es que fue presentada fuera del plazo que prevé la referida ley de responsabilidades para cumplir con dicha obligación, si se considera que debió haber hecho su declaración en el mes de mayo de dos mil ocho y aquélla fue presentada por la servidora pública el treinta de junio de dos mil ocho (foja 6 del expediente).

3. Por tanto, \*\*\*\*\* es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que la declaración respectiva fue presentada el treinta de junio esto es, fuera del plazo que prevé el artículo 37, fracción III, de la mencionada ley, de ahí que sea evidente que incurrió en la infracción a que alude el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir lo dispuesto en el primero de los preceptos citados de la ley de responsabilidades.

En el dictamen se aduce que no son obstáculo para arribar a la conclusión anterior, las defensas esgrimidas por \*\*\*\*\* en el informe rendido en el procedimiento, pues dicha servidora pública acepta expresamente que presentó su declaración fuera de tiempo.

III. Al haber encontrado responsable administrativamente a \*\*\*\*\* de la falta atribuida, en el dictamen se propone sancionarla con una **amonestación privada**, toda vez que la

conducta en que incurrió no está calificada como grave, además de que en términos generales se observó que era la primera vez que en el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruía un procedimiento disciplinario en su contra; que dicha infracción no le generó beneficio o lucro, o provocó daño o perjuicio en el patrimonio de este Alto Tribunal, al tratarse de la extemporaneidad o falta de oportunidad en la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial, correspondiente al ejercicio dos mil siete.

**SÉPTIMO. Trámite del dictamen.** El referido dictamen junto con el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa **51/2008** se remitió mediante oficio DGRARP/DGARA/001062/2008 al suscrito a fin de que resuelva en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO. Competencia.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es

competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de \*\*\*\*\* con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

**SEGUNDO. Marco normativo que regula el procedimiento.** Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal como lo señala el artículo 4° del Acuerdo General de Administración 9/2005 para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.

**TERCERO. Formalidades esenciales del procedimiento.** Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al **P. R. A. 51/2008**, se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que con motivo del seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro Patrimonial informó que \*\*\*\*\* presentó su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, de forma extemporánea; es decir, denunció ante el órgano competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil ocho (foja trece) la Contraloría determinó iniciar este procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo cual otorgó un plazo de cinco días hábiles para que \*\*\*\*\* rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa. **3.** Dicho proveído se notificó personalmente a la servidora pública el catorce de agosto de dos mil ocho (foja diecisiete). **4.** La servidora pública rindió el informe solicitado y ofreció como pruebas diversas constancias en copia simple (foja 24). **5.** El Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen

correspondiente y lo remitió a la Presidencia de este Alto Tribunal.

**CUARTO. Probables conductas infractoras.**

El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de \*\*\*\*\* y una vez desarrollado dicho procedimiento, la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicha servidora pública es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los diversos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

**QUINTO. Marco normativo aplicable a las probables conductas infractoras.** Para estar en aptitud legal de resolver sobre si \*\*\*\*\* omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro de su evolución patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8°, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los diversos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, establecen:

***“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:***

***(...)***

***XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”***

***“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:***

***(...)***

***XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”***

***“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:***

***(...)***

***III.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año....”.***

***“ARTÍCULO 50. Tienen obligación de presentar ante la Suprema Corte declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos:***

***(...)***

***XIX. Asesor;...”***

***“ARTÍCULO 51. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:***

***(...)***

***III. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, acompañada de una copia de la constancia de ingresos del servidor público y, en su caso, de una copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta, si está obligado***

***a presentar declaración en los términos de la legislación aplicable, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial a que se refieren las fracciones I y II de este artículo...".***

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende que los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el nombramiento de Asesor, están obligados a presentar durante el mes de mayo de cada año, declaración de modificación patrimonial.

**SEXTO. Análisis de las conductas infractoras.** En el caso de \*\*\*\*\* se le atribuye como infracción el haber presentado extemporáneamente la declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil siete, con motivo de su encargo como Asesor, por lo que es menester analizar las constancias de autos para determinar si su conducta se ajusta a la hipótesis de responsabilidad administrativa y si, derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de la misma.

De las copias certificadas del nombramiento \*\*\*\*\* , así como de la copia certificada del acuse de recibo de la presentación de su declaración de modificación patrimonial, documentos que corren agregados al presente expediente de responsabilidad administrativa, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia expidió nombramiento a \*\*\*\*\* como Asesor adscrito a la Dirección General de Planeación de lo Jurídico con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil siete, y que el treinta de junio de dos mil ocho se recibió extemporáneamente su declaración de modificación patrimonial correspondiente al año de dos mil siete.

De los señalados elementos de convicción, los cuales tiene valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento se arriba al convencimiento de que:

- \*\*\*\*\* al desempeñar el puesto de Asesor, adscrita a la Dirección General de Planeación de lo Jurídico se encontraba obligada a presentar declaraciones de situación patrimonial en términos de lo que prevén los numerales 50,

fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

- La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil siete, a que alude la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, debía presentarse a más tardar el dos de junio de dos mil ocho y dicha servidora pública la presentó hasta el treinta de junio de dos mil ocho.

La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al año dos mil siete fue presentada extemporáneamente, por lo que \*\*\*\*\* se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de presentar con oportunidad las declaraciones de situación patrimonial.

De esta suerte, se pone de manifiesto que dicha servidora pública al ejercer su encargo como Asesor, se abstuvo de presentar dentro del plazo señalado por la ley la declaración respectiva, por lo que al existir la obligación de presentar la declaración patrimonial anual para los servidores públicos de su categoría y funciones y no haberlo hecho así, es evidente que incurrió en la falta administrativa que se le atribuyó.

En tal virtud, se considera que como lo concluyó la Contraloría de este Alto Tribunal en el dictamen emitido en este procedimiento de responsabilidad administrativa, \*\*\*\*\* se ubicó en el supuesto de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente por incumplir con la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial en tiempo, establecida en los diversos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en los artículos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

**SÉPTIMO. Responsabilidad.** Al existir la infracción administrativa que se atribuyó a \*\*\*\*\* es menester analizar si dicha circunstancia trae

aparejada la imposición de una sanción en su contra o si, por el contrario, existen causas que lo justifiquen y, por ende, debe relevársele de aquélla.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que les asisten a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir si una falta administrativa debe ser sancionada, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión tal como lo reconoce el legislador en el artículo 37, párrafos noveno y décimo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al cual tratándose de la omisión en la presentación de la declaración patrimonial de inicio de encargo, es menester analizar si la falta respectiva encuentra alguna causa de justificación.

En los citados párrafos del numeral 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se dispone:

***“Artículo 37. (...) Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su***

***empleo, cargo o comisión por un periodo de quince días naturales...”***

***En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III...”***

De lo dispuesto en este numeral, aun cuando el supuesto que prevé se refiere a la omisión de la presentación inicial y no a la anual de modificación patrimonial se estima que, si ante aquella omisión, la legislación prevé que es factible analizar la existencia de alguna causa justificada, por igualdad de razón, ante una presentación de la declaración anual fuera de plazo previsto para esos efectos, debe estudiarse la existencia o no de una causa de esa naturaleza.

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible

justificación de una falta administrativa relacionada con la presentación de una declaración patrimonial, debe evitarse actuar con un rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate una extemporaneidad en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las características particulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen plena o parcialmente la conducta respectiva.

Con base en lo anterior, se impone analizar lo que \*\*\*\*\* manifestó a la Contraloría al rendir el informe que le fuera solicitado con motivo del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, lo cual consistió en:

...( )

- 1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien otorgarme un nombramiento por tiempo fijo como asesora, rango A, con efectos a partir del 16 de septiembre de 2007 al 15 de marzo de 2008 en la plaza 2944 (2, 9, 4, 4,) adscrita a la Dirección General de Planeación de lo Jurídico.**
- 2. Que a partir del 16 de marzo de 2008, este Alto Tribunal tuvo a bien otorgarme un nombramiento definitivo en la misma plaza.**

3. Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8, fracción XV y XXXVII, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, en mi carácter de servidor público de esta H. Institución, como asesora, rango A, me encuentro obligada a presentar declaración de modificación patrimonial en el mes de mayo de 2008.
4. Que cumplí de manera extemporánea con la obligación de presentar mi declaración de modificación patrimonial el día 30 de junio de 2008.
5. Que la extemporaneidad en el cumplimiento de esta obligación se debió a circunstancias totalmente involuntarias relacionadas con problemas de salud así como al cumplimiento de obligaciones de carácter laboral que a continuación detallo:
  - a) Con fecha 23, 24 y 25 de abril de 2008, se llevó a cabo el congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y perspectivas, organizado por la Dirección General de Planeación de lo Jurídico. Dicho evento estuvo bajo mi responsabilidad razón por la cual no me fue posible dedicar tiempo suficiente a la elaboración de mi declaración patrimonial durante el mes de abril.
  - b) Del 2 al 12 de mayo de 2008, asistí al programa interamericano de formación de capacitadores para la reforma procesal penal 2008, que se celebró en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Cabe mencionar que el proyecto que tengo asignado como asesora de la Dirección General de Planeación de lo Jurídico, tiene que ver con la elaboración de políticas judiciales de cara a la reforma penal en México.

- c) Posteriormente, mi salud se vio mermada por malestares físicos en vías respiratorias. En un principio, pensé que se trataba sólo de estrés por la extraordinaria carga de trabajo del mes anterior. Sin embargo, para cuando acudí con el médico, el 21 de mayo éste me indicó que se trataba de principios de bronquitis y que debía permanecer en casa realizando curaciones nasales porque existía el riesgo de convertirse en bronconeumonía.**
- d) Posteriormente, comencé a tener fuertes dolores de cuello y espalda, mismos que se incrementaron al grado tal de no poder moverme, de hecho, fui hospitalizada de emergencia el día 29 de mayo y permanecí durante seis días bajo la prescripción de reposo absoluto, uso de collarín y diversos medicamentos. Lo anterior, me impidió asistir de manera regular a mis labores en la Suprema Corte. Cabe señalar que tanto mi jefe inmediato el maestro \*\*\*\*\*, como la Directora General de Planeación de lo Jurídico, licenciada \*\*\*\*\*, tuvieron conocimiento de esta situación y me apoyaron de manera incondicional.**
- e) No obstante mis problemas de salud, sabedora de la obligación de presentar mi declaración de modificación patrimonial, acudí el 2 de junio (fecha límite para el cumplimiento de esta obligación) a las oficinas de esta Contraloría de a presentar la multicitada declaración patrimonial, sin embargo, esto no pudo ser posible en virtud de que el llenado del formato correspondiente requería de datos contenidos en el estado de cuenta de seguro de separación individualizado de Met Life así como en la declaración inicial correspondiente al año de 2007, mismos que no tenía en mi poder en ese momento.**
- f) Finalmente, cuando logré recuperarme de mis problemas de salud y reunir los**

**documentos e información que se requerían, me presenté nuevamente ante la Contraloría de este Alto Tribunal el 30 de junio de 2008 a cumplir con la obligación de que se trata.**

**Como se puede observar, en ningún momento tuve la intención de incumplir extemporáneamente con mi obligación de presentar mi declaración de modificación patrimonial ante la Contraloría de este Alto Tribunal, sin embargo, dadas las circunstancias, fue prioritario atender mis problemas de salud.**

**Quiero mencionar, que me comprometo a tomar todas las medidas necesarias, en adelante para cumplir puntualmente con esta obligación independientemente de cualquier circunstancia.**

**Anexo como pruebas de todos y cada uno de los hechos señalados los siguientes documentos:**

- a) Copia simple del cartel oficial del congreso El Sistema de Justicia Penal en México. Retos y perspectivas, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**
- b) Copia simple de la carta de aceptación al programa interamericano de formación de capacitadores para la reforma procesal penal 2008 que se llevó a cabo de 2 al 12 de mayo de 2008 en Viña del Mar, Chile.**
- c) Copia simple de pasaporte número \*\*\*\*\* a nombre de \*\*\*\*\*, en el que consta las fechas de entrada y salida de la ciudad de México a la ciudad de Santiago de Chile. Lo anterior a fin de acreditar la fecha en que tuve que asistir al programa de capacitación mencionado en el inciso anterior.**
- d) Recetas médicas de fecha veinte de mayo de 2008, expedidas por el doctor \*\*\*\*\*.**

**e) Diagnóstico y receta expedidas por el doctor \*\*\*\*\* de fechas 29 de mayo y tres de junio, ambos de dos mil ocho”.**

Del análisis de las documentales aportadas por \*\*\*\*\* destaca que se encontró realizando labores de capacitación en Santiago de Chile durante los días tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de mayo tal como consta en el sello del pasaporte número \*\*\*\*\* expedido a nombre de \*\*\*\*\*.

Además, durante los días veintinueve, treinta y treinta y uno de mayo, y primero, dos y tres de junio de ese año dicha servidora pública estuvo incapacitada debido a un esguince agudo cervical que le fue diagnosticado y el cual se le recomendó reposo domiciliario absoluto por seis días.

En virtud de lo anterior existen condiciones para considerar como días durante los cuales válidamente \*\*\*\*\* no estuvo en posibilidad de elaborar y presentar su declaración patrimonial anual los diez días del mes de mayo de dos mil ocho en que dicha servidora pública se encontró fuera de la ciudad por comisión así como los que gozó de incapacidad por prescripción médica, <sup>1</sup> más tres días del mes de junio durante los cuales continuó incapacitada.

---

<sup>1</sup> Así se consideró el siete de octubre de dos mil ocho al resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa 49/2008, en el que se sostuvo que las licencias médicas presentadas por un servidor público en las que se acredita incapacidad por cuestiones de

En ese tenor, para efectos del cómputo del plazo previsto en el artículo 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005 debe estimarse que los días del tres al nueve de mayo y del veintinueve de mayo al tres de junio de dos mil ocho no son computables para pronunciarse sobre la responsabilidad en la presentación extemporánea de la declaración respectiva.

A pesar de lo anterior, si el retraso fue de treinta días naturales y sólo trece estuvo impedida, debe estimarse que no obran en autos elementos suficientes que permitan relevarla de la responsabilidad administrativa derivada de la falta en que incurrió.

**OCTAVO. Individualización de la sanción.** En virtud de que se acreditó que \*\*\*\*\* se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer, atendiendo a la legislación actual, por ser ésta la vigente en la época en que ocurrieron los hechos.

En primer lugar, es conveniente recordar lo que se ordena en el artículo 37, fracción I, inciso a), de la

---

*salud son suficientes para efectos de que los días en que goce de licencia no sean computados en el plazo respectivo.*

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

***“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:***

***I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión como motivo del:***

***(...) a) Ingreso al servicio público por primera vez;...”***

Asimismo, lo que se establece en los párrafos noveno y décimo del mismo numeral:

***“Artículo 37. (...) Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un período de quince días naturales.<sup>2</sup>***

---

<sup>2</sup> En relación con la validez de esta sanción destaca la tesis de la Segunda Sala que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL ARTÍCULO 37, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. Cuando en un amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal contra el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé que se suspenderá en el empleo, cargo o comisión, por un periodo de 15 días

***En caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III...”***

De lo transcrito se desprende que el legislador estableció un sistema lógico y progresivo conforme al cual los servidores públicos incurrirán en una responsabilidad a la que resulta aplicable una diversa

---

naturales al servidor público que, sin causa justificada, no presente su declaración de situación patrimonial de inicio en el plazo de 60 días previsto en la fracción I del citado precepto legal, por violar las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos del fallo protector se traducen en que dicho precepto legal no vuelva a aplicarse en perjuicio del gobernado y que se deje insubsistente la resolución en la cual se aplicó, independientemente de que la autoridad responsable pueda emitir una nueva determinación en la cual, sin aplicar ese artículo, encontrara una fundamentación diversa, a fin de evitar que la conducta atribuida al solicitante de garantías quede impune, bajo el pretexto de que se anuló la parte que prevé la sanción por infracción a la obligación de presentar la declaración patrimonial de inicio. De acuerdo con ello, la autoridad administrativa podría recurrir al artículo 13 del ordenamiento legal invocado que señala, en general, las sanciones imponibles por infracción a las obligaciones de los servidores públicos, respetando el principio que establece que las sentencias protectoras de garantías no pueden perjudicar a los quejosos, lo que se traduciría en que únicamente se podrá imponer cualquiera de las sanciones previstas en las fracciones I y II del referido artículo 13, y en caso de suspender al agraviado, deberá ser por un periodo no menor de 3 ni mayor de 15 días. (Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008; Tesis: 2a. CCIII/2007; Página: 581)

sanción tomando en cuenta el grado de contumacia que se advierta del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial inicial.

En efecto, como se colige de lo señalado en el párrafo antes transcrito, tratándose de la omisión en la presentación de la referida declaración, si ésta se da en un primer momento, el servidor público se hará acreedor a una suspensión por un período de quince días, en cambio, de continuar por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido, se declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos.

En tal virtud, tomando en cuenta los dos supuestos previstos expresamente en los referidos párrafos, para efectos de la individualización de la sanción aplicable, debe tomarse en cuenta que los servidores públicos pueden incurrir no sólo en omisiones respecto de la presentación de la declaración patrimonial inicial, pues también existe la posibilidad de que la falta de presentación se purgue antes de que aquél sea llamado al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa, supuesto que atendiendo a la gravedad de la falta y a la conducta seguida por el que incurrió en ella, revela, necesariamente, una responsabilidad menor en relación con aquellos servidores que omiten presentar

la referida declaración, lo que sucede cuando cumplen con dicha obligación con posterioridad a que son llamados al mencionado procedimiento o bien, cuando ni siquiera con motivo de éste acatan la obligación en comento.

En ese orden de ideas, se impone concluir que en el caso de servidores públicos cuya declaración patrimonial se presente extemporáneamente pero antes de ser llamados a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el grado de esta última de ninguna manera puede analogarse al de la falta consistente en la omisión de la presentación de la citada declaración, supuestos estos últimos cuya sanción condigna está prevista expresamente en los párrafos noveno y décimo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por ende, al individualizar la sanción aplicable debe tomarse en cuenta si la falta cometida consiste en la presentación extemporánea de la declaración o de las omisiones previstas en los citados párrafos.

En este tenor, en el caso concreto conviene señalar que de las constancias que integran el expediente en que se actúa se desprende:

a) A fojas seis del expediente en el que se actúa, obra copia certificada del acuse de recibo extemporáneo de la declaración de modificación patrimonial de \*\*\*\*\* de treinta de junio de dos mil ocho.

b) Mediante oficio del catorce de julio de dos mil siete (foja uno), el Director de Registro Patrimonial comunicó a la Directora General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial que \*\*\*\*\* presentó de manera **extemporánea** su declaración de modificación patrimonial.

A partir de lo anterior, es posible concluir que \*\*\*\*\* presentó su declaración de modificación patrimonial el treinta de junio de dos mil cinco y al procedimiento respectivo fue llamada el catorce de agosto de dos mil ocho, lo que permite concluir que se trató de una presentación extemporánea de la declaración de modificación patrimonial, no de una omisión en el cumplimiento de esa obligación.

Esto es así en virtud de que debe considerarse que aquélla fue llamada al procedimiento hasta el catorce de agosto de dos mil ocho, por lo que si la correspondiente declaración patrimonial se presentó anteriormente, o sea, el treinta de junio de dos mil

ocho, no se está en presencia de una omisión en el cumplimiento de la obligación en comento, sino ante una presentación extemporánea.

En ese orden de ideas, no resulta aplicable el criterio de individualización previsto en el párrafo noveno del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que debe atenderse a los criterios generales de individualización de la sanción previstos en los artículos 13 y 14 de ese ordenamiento, en relación con el 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

***“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.***

***“En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley***

***Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”(…).***

Los artículos 13, fracciones I a IV, y antepenúltimo párrafo y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la letra dicen:

***“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:***

- I. Amonestación privada o pública;***
- II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de un año;***
- III. Destitución del puesto;***
- IV. Sanción económica, e***
- V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.***

***(…)***

***En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXII del artículo 8 de la Ley (…).”***

***“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:***

***“I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;***

***II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;***

***III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor; entre ellos la antigüedad en el servicio;***

***IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;***

***V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y***

***VI. El monto del beneficio, lucro, o daño derivado del incumplimiento de obligaciones.***

***Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que***

***habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”***

Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con base en las fracciones I a VI del transcrito artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la falta cometida por \*\*\*\*\* -prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto por el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos-, no está considerada como grave, de acuerdo con lo que se establece en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 del ordenamiento legal en mención así como del diverso numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además de que la referida falta administrativa no se encuentra

comprendida en el catálogo de faltas graves, debe precisarse que por sí misma tampoco resulta de gravedad, toda vez que se advierte que se trató de la extemporaneidad en la presentación de la declaración de modificación patrimonial, que no implicó un enriquecimiento inexplicable por parte del servidor público correspondiente; por otro lado, debe estimarse que la referida falta administrativa, implica un defecto en el cumplimiento de una obligación legal y, por ende, debe sancionarse con el fin de evitar prácticas de esta naturaleza.

**II.** Por lo que atañe al segundo punto cabe resaltar que las circunstancias socioeconómicas \*\*\*\*\*, no es necesario precisarlas en virtud de que en el caso no se impondrán sanciones pecuniarias, ni tampoco son relevantes para pronunciarse sobre la gravedad de la falta cometida.

**III.** En lo atinente al tercer elemento, es menester precisar que \*\*\*\*\* al cometer la infracción se desempeñaba como Asesor, por lo que su obligación de conducirse conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, es la misma que debe exigirse a cualquier servidor público, dado que su puesto y antigüedad no son preponderantes para imponer la

determinar la sanción que debe imponerse a dicha servidora pública.

En relación con los antecedentes de la infractora, también se debe tener en cuenta cuál ha sido la conducta procesal observada por la servidora pública durante el desarrollo de este procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

**“CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.** *La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se violen las garantías individuales.”*

(Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 111. Página: 88).

Del análisis de las constancias de autos se desprende que a \*\*\*\*\* se le notificó el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra; rindió el informe correspondiente, haciendo valer las defensas que estimó pertinentes y, además, ofreció la prueba que estimó conducente para su defensa. Lo anterior

muestra su interés en el desarrollo del procedimiento e, incluso, en la resolución que en éste pueda llegar a emitirse.

**IV.** Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para ejecutarla.

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de presentar declaraciones anuales de situación patrimonial, primordialmente se refiere a la honradez que debe caracterizar a todo servidor público, quien no debe mostrar signo alguno de enriquecimiento obtenido en el desempeño de sus funciones que se aparte de los emolumentos devengados por la prestación de sus servicios y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.

En el caso, aun cuando \*\*\*\*\* omitió parcialmente presentar su declaración de

modificación patrimonial correspondiente a dos mil siete, por lo que no se ciñó al marco legal aplicable, sin embargo, no se advierte de su conducta la existencia de un enriquecimiento inexplicable ni menos aún la intención de obstaculizar la fiscalización de su situación patrimonial; sin embargo, resulta importante evitar la afectación al bien jurídico que salvaguarda la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial.

Asimismo, en cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como a los medios empleados para ejecutarla, debe precisarse que de autos se advierte que la mencionada servidora pública sí formulo su declaración aun cuando, sin tener para ello alguna justificación, no lo hizo de manera oportuna.

**V.** En lo concerniente al quinto punto, se pone de relieve que del expediente personal de \*\*\*\*\* se advierte que no ha sido sancionada con motivo de alguna falta administrativa, de ahí que no se actualice el supuesto de reincidencia.

**VI.** Finalmente, por lo que hace al punto sexto de la disposición en comento, es preciso señalar que no existe en el caso constancia alguna en la que se desprenda que como consecuencia de la presente

falta \*\*\*\*\* hubiese obtenido algún beneficio, lucro, u ocasionando daño o perjuicio económico.

De tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió \*\*\*\*\* no está catalogada como grave; que no tuvo el ánimo de ocultar información en la medida que sí presentó su declaración, aunque lo hizo de manera extemporánea; no hay constancia de que hubiera sido sancionada con motivo de la comisión de alguna infracción administrativa, ni hay constancia de que hubiera estado sujeto a un procedimiento de esta naturaleza; y que con motivo de tal infracción administrativa no obtuvo beneficio o lucro, ni provocó daño o perjuicio a este Alto Tribunal.

En mérito de lo expuesto, en uso de las facultades que me confieren los artículos 14, fracción XXI, y 133, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tomando en consideración los elementos a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que ha lugar a imponer como sanción a \*\*\*\*\* la consistente en apercibimiento privado, que habrá de ejecutarse por conducto de la Contraloría de este Alto Tribunal, previa cita a la servidora pública respectiva en la sede de aquélla.

Asimismo, deberá remitirse copia del presente fallo a la Dirección General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de \*\*\*\*\*; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que la integre en el registro de servidores públicos sancionados.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**PRIMERO.** Conforme a lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, \*\*\*\*\* incurrió en la falta administrativa materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

**SEGUNDO.** Se sanciona a \*\*\*\*\* con un **apercibimiento privado** que habrá de ejecutarse en los términos expresados en la parte final del considerando octavo de esta resolución.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique esta determinación a la servidora pública sujeta al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así lo resolvió el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el licenciado Luis Grijalva Torrero, Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal.

